



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JAIME ALBERTO TAPIAS ACEVEDO
DEMANDADOS:	COLPENSIONES – EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
RADICADO:	0050013105-005-2018 – 00028
ACTA N°:	36

En la fecha indicada, siendo las **dos de la tarde** del día previamente señalado, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por JAIME ALBERTO TAPIAS ACEVEDO en contra de COLPENSIONES y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, para pronunciarse en virtud del recurso de APELACION interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia con la cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 36** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

El demandante pretende con este proceso, que se DECLARE que se encuentra en firme la calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por el I.S.S. el 05 de febrero de 1999 se encuentra en firme, y se CONDENE a COLPENSIONES a conceder la SUSTITUCION PENSIONAL por la muerte de su padre ROGELIO DE JESÚS TAPIAS, intereses moratorios y/o Indexación y costas procesales.

Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** El demandante fue calificado por Medicina Laboral del I.S.S con una pérdida de capacidad laboral del 53.05% con fecha

¹ Folio 3-9

de estructuración 05 de febrero de 1999, razón por la cual se le reconoció una pensión de invalidez mediante **Resolución 006913 del 13 de junio de 1999**. Su padre, el señor Rogelio de Jesús Tapias Pino, pensionado por vejez, **falleció el 3 de marzo de 2016**. **ii)** Con ocasión del siniestro, el demandante se separó de su cónyuge y se trasladó para la vivienda de sus padres quienes fueron los encargados de brindarle los cuidados económicos y personales hasta el año 2001 en el que se trasladó al Hogar María Auxiliadora donde permaneció 7 años contando siempre con el apoyo económico de su padre, porque el valor de la mesada pensional por invalidez era insuficiente para cubrir sus gastos. Luego se trasladó para otro hogar por un período de dos años, hasta que se radicó en el Hogar Mis Abuelos, donde permanece actualmente y en el que ambos progenitores decidieron vivir, desde 2014 hasta abril de 2015 que fallece su madre y hasta el 3 marzo de 2016 que fallece su padre. **iii)** Su padre percibía una prestación económica de vejez compartida entre COLPENSIONES y E.P.M con la que pagaba la totalidad de los gastos mensuales que no lograba cubrir con su pensión de invalidez para permanecer en el Hogar Mis Abuelos", los mismos que actualmente ascienden a \$1'300.000 y que cubren hospedaje, alimentación, arreglo de ropa y cuidados de enfermería las 24 horas; además de gastos extras como implementos de aseo, transporte para citas médicas, arreglo de uñas, peluquería, entretenimiento y diversión, obligaciones a las que no puede hacer frente con su mesada pensional, debiendo recibir ayuda de sus hermanos y parientes quienes pese a sus obligaciones tratan de sufragar la totalidad de la mensualidad del hogar. **iv)** En **julio de 2016** solicitó la pensión de sobrevivientes a EPM y COLPENSIONES, donde una asesora se negó a radicarlos argumentando que no se evidenciaba el dictamen de pérdida de capacidad laboral; por lo que solicitó infructuosamente expediente de copia el **12 de agosto de 2016**; y el **30 de agosto de 2016** remitió a COLPENSIONES por correo certificado la documentación para el reconocimiento de la pensión de invalidez, solicitud nuevamente rechazada con oficio radicado No 2016_10197947 del 31 de agosto de 2016, por no adjuntar dictamen de calificación por pérdida de capacidad laboral. Fue así como instauró acción de tutela ante el Juzgado Once de Familia Oral de Medellín, que fue denegada con sentencia del 13 de marzo de 2017 y el **11 de julio de 2017** solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siendo rechazada el **25 de diciembre de 2017** con los mismos argumentos.

1.2. LA CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES²

La entidad contestó oportunamente, oponiéndose a las pretensiones básicamente por lo siguiente: **i)** El demandante es beneficiario de una pensión de invalidez desde 1999 por lo que cuenta con un ingreso económico mensual con el cual puede solventar sus

² Folio 50-60

necesidades básicas. Y afirma en la demanda que su padre era quien le ayudaba económicamente a cubrir los gastos que no alcanzaba a solventar debido a su situación de discapacidad física, sin embargo, para el año 2016 el padre recibía una pensión de \$744.887 sin tener en cuenta los descuentos en salud, por lo que resulta poco creíble que el pensionado fallecido cancelara mensualmente el valor restante que debía pagarse en el Hogar Mis Abuelos, ya que si lo hiciera quedaría sin dinero para cubrir sus necesidades y las de su cónyuge. Si se afirma que sus padres desde el año 2014 residían en ese Hogar, ello ascendería a la suma de \$3.000.000 mensuales, lo que lleva a interrogarse ¿hasta qué punto es cierto lo expuesto por el demandante?

Propuso como excepciones de mérito: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, BUENA FE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

1.3 CONTESTACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN³

La entidad contestó oportunamente, oponiéndose a las pretensiones. Acepta el reconocimiento pensional a favor del causante, señalando que para el 3 de marzo de 2016 asumía una diferencia pensional por valor de \$688.423. Expresa que el actor no solo allegó a la entidad el 12 de junio de 2016 un poder con el confería facultades a dos abogados para que adelantaran los trámites para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre, pero nunca allegó los documentos para acreditar la calidad de inválido como la Resolución con la que el I.S.S le reconoció pensión de invalidez o el dictamen con fecha de estructuración al momento de la muerte de su padre, para así adelantar la investigación administrativa correspondiente.

Propuso como excepciones de mérito: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PAGO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA CONFORME A LA LEY, IMPROCEDENCIA LEGAL DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR AUSENCIA DE REQUISITOS, SUBROGACIÓN PARCIAL, PRESCRIPCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES MORATORIAS.

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **29 de enero de 2020⁴**, el Juez ABSOLVIÓ a COLPENSIONES y EPM de toda las pretensiones de la demanda y CONDENÓ en COSTAS a la parte demandante.

³ Folios 112-120

⁴ Folio 535 – 536 CD Folio 534

Para ello razonó de este modo: **i)** Invoca en su providencia el artículo 13 de la ley 797 de 2013, la sentencia C 111 de 2006, SL 14923 de 2014, para señalar que en este proceso está probada que el demandante es hijo del causante y acredita la calidad de inválido, así como que percibe pensión de invalidez e incremento por tener a cargo a su cónyuge. **ii)** Pero al valorar el acervo probatorio, concluye que **no se acredita la dependencia económica** del demandante frente a su padre para el momento de la muerte. Lo anterior, a partir de los documentos de folios 31- 32, 42, 17, 82 a 101, 110, 517 a 522 con los que se acredita que vive en la Casa Hogar Mis Abuelos desde el 17 de marzo de 2008 donde paga una mensualidad, percibe como ingresos el valor de la mesada pensional y un incremento por cónyuge a cargo. Y a partir de la declaración de los testigos Blanca Miriam Giraldo, Merly de Jesús Franco Macías y Gloria Elena Cano Medina, que califica como que “no son coherentes, no son claros, son testimonios de oídas, dan respuestas en abstracto, de forma genérica, sostienen una teoría de la cual no dan cuenta de su conocimiento, y por eso este despacho se apartará del conocimiento de tales testigos”. Así, afirma que no existe prueba que respalde lo afirmado en la demanda en cuanto a que efectivamente para el momento del fallecimiento de don Rogelio de Jesús Tapias Pino, Jaime Alberto Tapias Acevedo dependía económicamente de él, para declarar próspera la excepción de inexistencia de la obligación del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. **iii)** Recaba en que de acuerdo con la prueba documental, la cuantía de la pensión que disfrutaba el causante era mínimamente superior al SMLMV, y con ello debía proveer los gastos para la subsistencia de su cónyuge, madre del demandante; por lo que “es bastante difícil soportar un apoyo económico concreto del padre del aquí demandante en beneficio de éste cuando el propio demandante también obtenía un ingreso cercano al salario mínimo, pero todo esto además, se contrapone con el dicho de la señora Blanca Miriam Giraldo Cárdenas quien sostuvo que quien provee ayuda y completa los recursos para el pago de los gastos de su permanencia en el hogar geriátrico “Mis Abuelos” respecto del señor Jaime Alberto Tapias Acevedo era la señora Irma Tapias Acevedo, hermana de él, y que incluso la propia declarante Franco Macías tampoco se opone a esta circunstancia. La señora Gloria Elena al respecto simplemente dijo no saber”.

3. EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

En la audiencia de trámite y juzgamiento, la apoderada de la parte demandante interpuso el recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia, planteando básicamente lo siguiente: **i)** “Las declaraciones rendidas por Gloria Elena Cano y Merli Franco Macías ante muchas preguntas, sus respuesta era que no tenían conocimiento o que no sabían, lo cierto del caso es que sus manifestaciones obedecen a una prueba de honestidad al momento de dar respuesta a la misma, no tenían por qué contestar preguntas que de una u otra forma generaban o comprometían la veracidad de las mismas, adicionalmente que eran casos puntuales y muy personales de la familia que por muy allegados que sean de la misma no tienen el conocimiento de estos, por el contrario fueron enfáticos en manifestar que la persona que

ayudaba a cubrir los gastos de mi representado era el señor Rogelio de Jesús Tapias, que era quien vivía en el hogar con él, que la ayuda se mantuvo hasta el momento del fallecimiento, y que la pensión recibida por mi representado no alcanzaba para cubrir los gastos que además tenía que cubrir como medicamentos, persona que lo acompañaba, pañales, de acuerdo a esto entonces, contrario a lo que manifiesta el Despacho, para esta apoderada sí ofrecen elementos probatorios adicionales al Despacho, pues también lo ha reiterado la jurisprudencia, así como tal y lo manifestó el Juez de primera instancia, esa dependencia económica no tiene que ser total sino que sea suficiente o que sea necesaria para el sostenimiento de la persona que lo alega". **ii)** Insiste en que el actor es una persona que no solamente sobrevive con un salario mínimo pagando un hogar, sino que no tiene otro medio de subsistencia, no tiene posibilidad de trabajar, no cuenta con bienes que le permitan generar ingresos adicionales y los gastos que su enfermedad lastimosamente le ocasiona; por lo que era su padre quien de una forma amplia cumplía o ayudaba a sufragar los gastos. **iii)** Y en relación con el proceso de incremento pensional, advierte que fue el mismo señor Rogelio quien afirmó la dependencia económica de Blanca Miriam Giraldo, pero "más adelante o en el transcurso del tiempo las condiciones económicas variaron y ya al momento en que tuvo que enfrentar esa enfermedad y que tuvo que entrar a sufragar los gastos de uno, pues ya no había forma de que dependiera económicamente de este y por tanto pasó a depender económicamente de su padre".

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁵, algunas partes intervinieron oportunamente, así:

COLPENSIONES solicita que se CONFIRME la decisión absolutoria, señalando lo siguiente:

i) Según el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 el demandante debe acreditar una pérdida de capacidad laboral superior al 50% que afirma fue estipulada por el ISS en el año 1999, documento que no reposa en los archivos de la entidad. **ii)** No se acreditó la dependencia económica del señor Rogelio de Jesús Tapias ya que el demandante afirma tener una pensión de invalidez desde 1999 por lo que cuenta con un mínimo vital de forma mensual, y no solo con afirmar que le cancelaban un hogar donde residía se prueba la dependencia económica, ya que con su pensión es posible cubrir un hogar más económico. **iii)** El actor bajo ninguna circunstancia probó fehacientemente su dependencia económica en términos de parcialidad y sustento al derecho mínimo vital cualitativo ante Colpensiones.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P también solicita que se CONFIRME la decisión absolutoria, señalando lo siguiente: **i)** La reglamentación en materia de pensión de

⁵ Artículo 15 Decreto 806 de 2020

sobrevivientes, no contemplan el derecho a dicho reconocimiento bajo los supuestos fácticos en que se encuentra el demandante. No es la sola afirmación lo que permite reconocer un derecho, sino la prueba real y concreta que permita acreditar con certeza el supuesto del derecho invocado. **ii)** No se acreditó la dependencia económica del demandante frente a su padre, y por el contrario se pudo establecer: **a)** Sus padres vivían en un hogar geriátrico, asumiendo el padre el costo con los ingresos derivados del salario mínimo que recibía como pensión de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. **b)** Jaime Alberto tenía recibía ingresos propios al ser beneficiario de una pensión de invalidez de un salario mínimo. **c)** El actor tiene cónyuge y a pesar de estar separados de cuerpos, no se disolvió ni liquidó la sociedad conyugal. Y Colpensiones le consigna una suma de dinero por incrementos pensionales. **d)** Su núcleo familiar está conformado por dos hijos: Paola Andrea y Juan David Tapias, así como dos hermanos, Irma y Luis Enrique Tapias Acevedo, quienes tienen obligaciones de asistencia y ayuda, como lo disponen las normas civiles. **iii)** Invoca las sentencias **SL 14923 -2014, SL 2726 - 2018, SL 2785-2020, SL 957-2020** para señalar que , en materia de dependencia económica la contribución debe ser cierta y no presunta, y que la prueba del proceso no aporta elementos que lleven al convencimiento de la dependencia económica respecto de su padre al momento de la muerte; insistiendo en que, no se acreditó a cuanto ascendía el presunto apoyo económico, su periodicidad, permanencia y si era relevante, significativo y esencial para el sustento del actor. Los testigos no tienen conocimiento directo de los hechos, sus respuestas fueron vagas, genéricas.

Pues bien, se ha proferido una **DECISIÓN ABSOLUTORIA** en contra del DEMANDANTE, teniendo como argumento esencial que no se demuestra la dependencia económica para el momento del fallecimiento de su padre Rogelio de Jesús Tapias. Así, en virtud de lo es materia del RECURSO DE APELACION de la parte demandante, el problema jurídico que se desarrollará en esta providencia, es básicamente el siguiente: ¿El señor Jaime Alberto Tapias Acevedo demuestra una verdadera dependencia económica respecto de su padre Rogelio de Jesús Tapias Pino, para el momento de su fallecimiento en el mes de marzo de 2016?

5. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA COMO UN REQUISITO DEL HIJO INVÁLIDO PARA SER BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Para el caso de los hijos, cuando quién fallece es el padre o la madre, se consagra lo siguiente en el **artículo 13 de la Ley 797**:

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno~~; y, los hijos inválidos si

dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de *invalidéz*. Para determinar cuándo hay *invalidéz* se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993"⁶

En relación con la dependencia económica, en la Sentencia **C 111 de 2006** la Corte fijó el alcance de la expresión a la Luz de los postulados de la **Carta Política** de **1991**. De acuerdo con este importante precedente, para acreditarla no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el contrario, **basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.**

En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: **i)** Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. **ii)** El salario mínimo no es determinante de la independencia económica. **iii)** No constituye independencia económica recibir otra prestación. **iv)** La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. **v)** Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. **vii)** Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.

⁶ La expresión "esto es, que no tienen ingresos adicionales" declarada INEXEQUIBLE, y la expresión subrayada "si dependían económicamente del causante" declarada EXEQUIBLE, por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066-16 de 17 de febrero de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.

- Expresiones 'invalidéz' en letra itálica declaradas EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por La Corte Constitucional mediante Sentencia C-458-15 de 22 de julio de 2015, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Expresión subrayada 'hasta los 25 años' declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-451-05 de 3 de mayo de 2005, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández

- Expresión 'y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno' contenida en el texto original declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

En el mismo sentido, se ha desarrollado la jurisprudencia nacional, señalando que el análisis en cada caso concreto debe orientarse a determinar el peso del aporte económico que efectuaba el hijo a sus progenitores para al momento de su fallecimiento, para verificar si ante su ausencia se afecta no solo el mínimo vital sino la congrua subsistencia del beneficiario. Así, la Corte Constitucional en sentencias como las **T-538 de 2015, T-725 de 2017 y T-424 de 2018**; y la sala Laboral de la Corte Suprema en las **SL 11871 de 2017, SL 2605 – 2019, SL 3772 -2019 y SL 3286 – 2019 – SL 1540 -2020 - SL 2327 -2020 – SL 2333 -2020**

En efecto, conforme a lo dispuesto en la normativa atrás mencionada, la dependencia económica no implica una sujeción total y absoluta de los beneficiarios frente a los ingresos del causante; y se deriva del apoyo otorgado con características de **oportuno, continuo y suficiente**, al punto de ser determinante para la subsistencia, aun cuando el beneficiario tenga otros ingresos propios o de otras personas, al no ser necesario un estado de pobreza o negligencia, pues en el ámbito de la seguridad social, más que el simple concepto de subsistencia, juega un papel preponderante el de la vida digna y decorosa, de quien se ve privado de la ayuda que le prodigaba el fallecido. Así, la postura de la Alta Corporación de la Justicia Ordinaria reconoce que los recursos que eventualmente pueda percibir una persona, no necesariamente lo convierten en autosuficiente e independiente económicamente, si su subsistencia mínima y digna se hallaba condicionada al ingreso proveniente del causante. (**SL400-2013 - SL816-2013-SL2800-2014 - SL3630-2014- SL6390-2016- SL14539-2016 - SL15058-2017 - SL11079-2017-SL 5292-2018, SL5293-2018**).

Siendo claro que, aun cuando la dependencia no debe ser total y absoluta, no implica que cualquier estipendio entregado a los familiares deba ser determinante para ser merecedor de la pensión (**SL4811-2014**), porque la subordinación económica presenta, como rasgo fundamental, que una vez fallecido el causante y extinguida la contribución realizada al beneficiario, este se ve menguado en su solvencia. Así, en múltiples pronunciamientos, entre ellos la sentencia **SL 590-2018**, se ha puntualizado que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria no siempre es indicativa de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley. En ese sentido, se ha precisado sobre la dependencia económica que debe ser: **i) cierta y no presunta**. Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro derivada del vínculo de parentesco. **ii) Regular y periódica**, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido

hacia el presunto beneficiario. **iii) Significativa**, respecto al total de ingresos del beneficiario. En otras palabras, que el aporte constituya en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia. (CSJ SL816-2013, identificada con la radicación 44701, CSJ SL, 29 oct. 2014, rad. 47676, SL14923-2014, SL18980-2017 y SL2490-2019).

En síntesis, es en cada caso concreto que se debe evaluar la calidad de beneficiario, bajo la égida de la dinámica de cada hogar, pues es a partir de dicho estudio que puede inferirse la subordinación económica, no obstante, la existencia de otros recursos, cuando quiera que el ingreso proveniente del causante garantice unas condiciones de subsistencia digna.

Así mismo, cumple acotar que para el éxito de la pretensión no es necesario demostrar **el origen de los recursos** con los que el afiliado o pensionado fallecido ayudaba, sino que basta con acreditar la dependencia económica. (SL, 20 oct. 2010, rad. 38399 reiterada en CSJ SL18980-2017, CSJ SL165-2018 y CSJ SL113-2018. Y en igual línea la sentencia SL, 20 oct. 2010, rad. 38399, reiterada en las SL2587-2019 y SL529-2020). Bajo el mismo planteamiento, en aras de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar **el monto exacto de lo aportado por el causante**, requisito que no está previsto en la ley, de modo que no puede exigirse al demandante el cumplimiento de cargas adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación, que se concretan en la carga de demostrar la dependencia económica, para lo cual existe plena libertad probatoria en favor de la parte actora, por una parte, y libertad de apreciación de las pruebas en favor del juez, por otra, aspecto definido en la sentencia SL 6502-2015, reiterado en la SL 2327 -2020:

“En similar sentido, esa exigencia, construida ficticiamente por el casacionista, además de no estar prevista en la ley, coloca en una situación desventajosa y complicada a la parte accionante, en la medida que la prueba del monto exacto de la contribución del causante al sostenimiento del hogar, es de muy difícil consecución, si se tiene en cuenta que, generalmente, el aporte económico y material no viene representado en un suma de dinero única, sino en contribuciones de distinta índole, orientadas a satisfacer distintas necesidades, como la alimentación, transporte, recreación, vivienda, entre otras.

De esta suerte, la propuesta del recurrente deja a un lado que el apoyo a los padres no solo se manifiesta en la entrega de sumas de dinero, sino también en el suministro de otros bienes materiales, igualmente valiosos para la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales, que han de tenerse en cuenta a la hora de valorar la subordinación económica de los padres con respecto a los hijos. Evidentemente, este ejercicio fue realizado por el juez de alzada, al señalar que el causante ayudaba a solventar los gastos del hogar en cuanto a la alimentación, estudio, transporte y demás gastos domésticos”.

6. CASO CONCRETO

- Para efectuar el análisis debe partirse de las siguientes premisas que no ofrecen motivo de discusión en este proceso: **i)** El señor **ROGELIO DE JESÚS TAPIAS PINO** disfrutaba desde el año 1992 una pensión de vejez compartida entre el **ISS** y **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.**⁷. **ii)** Falleció el **03 de marzo de 2016** a sus 83 años⁸, estaba casado con MARIA ELENA ACEVEDO DE TAPIAS quien falleció el **8 de abril de 2015**⁹. Fruto de esa unión nació el **10 de marzo de 1971** JAIME ALBERTO el demandante, por lo que para la fecha del fallecimiento de su padre tenía 45 años. **iii)** El actor acredita la calidad de **inválido**, habiendo sido calificado por el I.S.S. con una PCL del **53.05%** con fecha de estructuración **febrero 6 de 1999**¹⁰, condición ratificada en el proceso a partir de la historia clínica del actor¹¹ y dictamen pericial decretado en el proceso, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia del 14 de agosto de 2019, en el que se define una PCL del **63.34%** con fecha de estructuración **5 de febrero de 1999**¹². **iv)** Al demandante le fue reconocida una pensión de invalidez de origen común por el I.S.S. con **Resolución 6913 de 1999**¹³ y en tal condición, también reclamó **incremento pensional por cónyuge a cargo**, acreditándose que se encuentra casado desde el 13 de marzo de 1979 con BLANCA MIRYAM GIRALDO CÁRDENAS¹⁴. Fue así como instauró proceso ordinario laboral que se tramitó justamente en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito bajo el Radicado 050013105 0052004706 y que culminó con sentencia de segunda instancia del 17 de agosto de 2006 en la que se **CONDENÓ** al I.S.S. al reconocimiento retroactivo desde el 30 de junio de 2000 y mientras las circunstancias que le dieron origen subsistan¹⁵. Ese incremento del 14% del valor de la pensión mínima se reconocía para la época del fallecimiento del causante y se acredita su pago mensual al menos hasta el mes de octubre de 2019¹⁶. **v)** Finalmente, es claro que con ocasión del fallecimiento de su padre, **el 12 de julio de 2016** el señor TAPIAS ACEVEDO radica la solicitud de pensión de sobrevivientes ante las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. quien aduce que al tratarse de una pensión compartida con Colpensiones, se requiere copia de la resolución de esta administradora con la que se decide la sustitución pensional¹⁷. Fue así como el **31 de agosto de 2016** solicitó pensión de sobrevivientes

⁷ Folios 10- 13 y 161- 165

⁸ Folio 39 y 44

⁹ Folio 40

¹⁰ Folios 16 y 86

¹¹ Folios 199-247, 253-303, 306- 501

¹² Folio 186- 188 y 503- 507.

¹³ Folio 15

¹⁴ Folio 181

¹⁵ Folios 87- 101

¹⁶ Folio 110,517,518,521 y 522

¹⁷ Folio 18

a COLPENSIONES, que fue rechazada requiriendo dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral¹⁸.

- La controversia se presenta es respecto al requisito dependencia económica del señor **JAIME ALBERTO TAPIAS** respecto a su padre, pues de acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, en la DEMANDA se afirma entre otros, que con ocasión del siniestro que le causó la invalidez el demandante se separó de su cónyuge y se trasladó para la vivienda de sus padres quienes fueron los encargados de brindarle los cuidados económicos y personales, y a partir del año 2001 se trasladó a vivir en diferentes Hogares, como María Auxiliadora y Mis Abuelos, donde permanece actualmente, y que con el valor de la pensión compartida que recibía su padre de COLPENSIONES y E.P.M, pagaba la totalidad de los gastos mensuales que no lograba cubrir con su pensión de invalidez para permanecer en el Hogar Mis Abuelos. Mientras que **COLPENSIONES** ha defendido la tesis desde la contestación de la demanda que tal dependencia económica no es cierta, señalando que el causante para el año 2016 percibía una pensión de salario mínimo, igual valor al de la pensión de invalidez que recibe el demandante, resultando poco creíble que el pensionado fallecido cancelara mensualmente el valor restante que debía pagarse en el Hogar Mis Abuelos por su hijo, si se afirma en la demanda que sus padres desde el año 2014 residían en ese mismo Hogar
- El Juez de instancia acogió la tesis de las demandadas pues concluyó que en este proceso **NO** se había acreditado el requisito de dependencia económica al momento de la muerte del señor **ROGELIO DE JESÚS TAPIAS** y es por eso que la recurrente insiste en que se efectúe la valoración del acervo probatorio, cuestionando la valoración efectuada en la sentencia.

Pues bien, de acuerdo con el análisis normativo y jurisprudencial definido en el **acápito quinto** de esta sentencia, la calidad de beneficiario del señor **JAIME ALBERTO TAPIAS** depende de que se acredite en este proceso una verdadera dependencia económica respecto de su padre, el señor **ROGELIO DE JESÚS TAPIAS** al momento de la muerte. Debe destacarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo **167 del CODIGO GENERAL DEL PROCESO**, disposición normativa en la que se consagra una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, referida a la prueba de los hechos que se alegan y se conoce como principio “**onus probandi**”; es a la parte demandante a quien le corresponde acreditar los hechos que invoca en su demanda.

¹⁸ Folio 82 -83 y 23 - 24

En efecto, desde la sentencia **C-070 de 1993** la Corte Constitucional ha señalado que, en las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos. De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

En síntesis, esta institución de las cargas probatorias pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, ***“las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”***, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia **T-733 de 2013**.

- Pero debe la Sala desde ya anunciar, que efectuada la valoración del acervo probatorio a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo**, en este caso la parte demandante no cumplió con la carga de probar una verdadera dependencia económica respecto de su padre fallecido, pues, aparte de la prueba documental referenciada al inicio de este caso concreto, se advierte lo siguiente. De un lado, es claro que de acuerdo con lo que expresa en documentos allegados con la demanda, el señor TAPIAS ACEVEDO vive en CASA HOGAR MIS ABUELOS desde el 17 de marzo de 2008 y para el mes de julio de 2017 en que se expide la certificación, pagaba \$1.300.000 de mensualidad con los servicios que cubre y los que no se encuentran incluidos en ese valor¹⁹. Y obra DECLARACIÓN EXTRAJUCIO del 13 de junio de 2016 de CESAR OBDULIO MARTINEZ ESCOBAR y BETTY LINET ROMAN HOLGUIN del 13 de junio de 2016 ante el Notario 28 del Círculo de Medellín, en la afirman constarles que el actor “vivía bajo el mismo techo con su padre el señor ROGELIO DE JESUS TAPIAS PINO (...) en la Casa Hogar “Mis Abuelos” del cual nosotros somos propietarios, adicionalmente manifestamos que el señor JAIME ALBERTO TAPIAS ACEVEDEO, dependía económicamente en gran parte de su extinto padre a pesar de que recibe una pensión con el salario mínimo”²⁰

Y en el proceso declaró la señora **Blanca Miriam Giraldo**, cónyuge del señor Jaime Alberto Tapias, de quien se afirmó en el HECHO TERCERO de la demanda el haberse

¹⁹ Folio 31 y 32

²⁰ Folio 84

separado con ocasión al siniestro ocurrido en el año 1999 cuando le propinaron 4 impactos de bala que le ocasionaron la invalidez, quedando inicialmente al cuidado de los padres y a partir del año 2001 en “hogares”. En efecto, de lo que afirma en su declaración, se advierte que su contacto con el demandante es esporádico, de manera que resulta siendo testigo de oídas, pues señala que la información que brinda, no la adquiere directamente, sino a través de sus hijos.

“¿y cuánto hace que fue la última vez que usted habló con el señor Jaime? ¿cuál fue la última vez? Eso hace como año y medio; hace como año y medio ¿y antes cuánto hacía? ¿fuera de esa última vez cuánto hacía? No, pues más o menos como un año también, cuando estuve que lo cuidé un año y medio; o sea que ¿usted habla más o menos con don Jaime por ahí cada año, cada año y medio? Sí, sí”

Además, aunque en algún momento de su testimonio refiere que era el causante quién contribuía a cubrir los gastos del demandante, sin embargo, de manera espontánea afirma que es la señora Irma Tapias, hermana de Jaime Alberto, quien ha sufragado los gastos que no se alcanzan a cubrir con la mesada pensional que éste percibe.

“¿Hasta cuándo recibió usted los incrementos? Según lo que dijo anteriormente ¿hasta cuándo los recibió? Yo recibí eso en el 2007, 5'000.000; sí y ¿de ahí en adelante ha vuelto a recibir? Sí; ¿hasta cuándo? Hasta enero; ¿hasta enero de qué? De este año; y ¿cómo cobra usted ese valor? ¿de qué forma lo recibe? No, a mi me lo consignan; ¿quién? Irma Tapias; ¿Quién es Irma Tapias? La hermana de Jaime; ¿es la señora que está afuera? Ajá Irma Tapias, es la que está ahí; ¿sí? ¿la que está afuera? Doña Miriam ¿es la que está sentada ahí atrás? Sí; ¿es ella? Sí, Irma Tapias; y ella ¿por qué le consigna ella? ¿a qué se debe que doña Irma reciba ese dinero? ¿usted sabe? Porque doctor como ella cobra la pensión, o sea, a Jaime Tapias creo que le consignan la pensión, pero ella es como la representante, ella es como la que le compra todo, la que le consigue todo, la que le ajusta para lo que necesite, es ella, como el incremento viene en la pensión de él entonces a ella le queda más fácil; y usted nos acaba de decir algo, usted dice que ella le ajusta, ¿qué le ajusta ella? Le ajusta la pensión, o sea el arriendo de allá donde está, pues a él; sí y ella es la que se encarga de todo lo que él necesite; y ¿usted por qué sabe que ella es la que le ajusta? Ay pues doctor porque es que él solamente tiene esta hermana, o sea tiene la hermana y tiene el hermano pero hasta donde tengo entendido y por mi hija que esta tan enterada, que ella es la que más pendiente está de él; pero ¿usted sabe realmente cuanto le ajusta doña Irma? No doctor, yo no sé, yo la verdad no sé; y ¿para qué le ajusta Irma a él? Por eso, para lo que paga allá en el hogar, para un taxista para llevarlo al médico, para los medicamentos, para todo; ¿cuánto hace que Irma le da eso a don Jaime? Ay doctor pues yo tengo entendido que desde siempre, como que a él la pensión nunca le ha alcanzado para todo, ella es la que está más pendiente de él; y ¿doña Irma tiene alguna posibilidad económica de hacerlo? ¿ella qué bienes tiene? Pues no doctor, pues yo hasta ahí no sé, sé que hace una buena obra con el hermano ayudándole, pero yo como es que tenga plata, yo no sé”. (...) “y ¿usted nos decía que la pensión de don Jaime es por un salario mínimo, es decir, por menos valor, nos puede reiterar si es así o nos puede aclarar entonces ¿la diferencia cómo la cancela don Jaime? Por eso, con la ayuda de la hermana, de Irma Tapias”

También se comparte la valoración que se efectúa en la providencia que se revisa, en relación con la testigo **MERLY DE JESÚS FRANCO**, amiga de la familia, quien sobre la mayoría de las preguntas realizadas afirma no tener conocimiento:

“¿usted sabe que ingresos tenía el señor Jaime Alberto Tapias? no, no sé; diga si usted sabe, para el mismo año 2016 ¿qué ingresos tenía cuando vivía el señor Rogelio de Jesús Tapias Pino? ¿Quién? ¿don Rogelio? Rogelio de Jesús Tapias Pino, no, yo no sé qué ingresos tenía don Rogelio; dígame si ¿usted sabe para el año 2016 qué gastos tenía para sobrevivir el señor Jaime Alberto Tapias Acevedo? ¿Recuerda? No, no sé qué gastos tenía; no sabe que gastos tenía, diga si ¿usted sabe si para ese mismo año 2016 qué gastos tenía el señor Rogelio de Jesús Tapias Pino? No, no sé qué gastos tenía; díganos si usted puede precisar ¿de dónde provenían los gastos, perdón, los recursos del señor Jaime Alberto Tapias Acevedo par su vivir? Pues yo sabía que él estaba pensionado; ¿usted sabe cuál era la cuantía de la pensión de don Jaime Alberto? El mínimo. y ¿usted sabe qué ingresos tenía el señor Rogelio de Jesús para ese mismo año? No, no sé cuántos ingresos tenía él; no sabe, ¿usted sabe precisar cuál era el valor de la estadía del señor Jaime Alberto Tapias del geriátrico donde él reside? No, no sé cuánto vale la estadía de él; dígame si usted sabe si ¿alguna otra persona diferente de Jaime Alberto subsidia o cancela el valor de la estadía? Es decir, del costo de la estadía del señor Jaime Alberto en el hogar geriátrico donde reside no, no sé quién le ayuda; dígame si usted sabe si la señora Irma Tapias Acevedo ¿usted conoce a la señora Irma Tapias Acevedo? Primero sí, sí la conozco; ¿usted sabe si la señora Irma Tapias Acevedo hacía alguna contribución para los gastos de sostenimiento del señor Jaime Alberto Tapias Acevedo? Pues por lo que tengo entendido sí; ¿y cómo se enteró usted? pues porque yo soy muy de la casa de ellos, y ellos dicen que ya no le alcanzaba a él con el mínimo, entonces ellos como que le ayudan, pero no se la cantidad; ¿quiénes son ellos? Doña Irma y Luis Enrique; doña Irma y Luis Enrique ¿y le ayudan con qué? Pues me imagino que a terminar de pagar lo que paga en el geriátrico, no sé; ¿cuánto hace que ellos le ayudan a pagar lo que Jaime paga en el geriátrico? No sé decirle; usted dice que se imagina, ¿usted lo que está diciendo es porque lo está realmente imaginando o suponiendo o tiene algún conocimiento cierto y concreto sobre lo que no está señalando? ¿De que ellos le ayudan?; sí. pues yo si he tenido conocimiento de que ellos le han ayudado; ¿sabe en qué consiste esa ayuda? No, no sé; ¿usted puede decir si esa ayuda es dineraria? ¿es dinero?; sí. pero para entregárselo a él no, le ayudan a pagar el geriátrico; ¿y usted sabe con cuánto le ayudan a pagar el geriátrico? No sé porque no sé cuánto vale el geriátrico, entonces no se la cantidad”

Y aunque finalmente señala que era el causante quien cubrió los gastos del demandante hasta su muerte, tampoco ofrece claridad a la Sala sobre la razón de su dicho, solo narra que cuando visitaba a la familia Don Rogelio y doña Elena se lo comentaban; sin que le conste de manera directa la contribución concreta que el causante hacía ni su alcance, para poder afirmar que fuese un aporte regular o periódico y significativo respecto al total de ingresos de su hijo inválido

A igual conclusión se llega con la declaración de GLORIA ELENA CANO, quien tampoco aporta elementos de convicción suficiente para concluir una verdadera dependencia económica. La forma de responder desdibuja la idea de un testimonio responsivo, porque no da solución a todas las cuestiones que se interrogan, no se recibe una respuesta adecuada de acuerdo con el conocimiento que razonablemente debe tener. De hecho, se trata de una testigo que no tiene conocimiento directo, porque lo que sabe respecto de la situación de Jaime Alberto Tapias es por la información proporcionada por Irma Tapias, la hermana del actor:

“¿cuántos eran los ingresos del señor Jaime Alberto Tapias para el año 2016? No sé; no sabe cuántos eran los ingresos, ¿usted conoció a don Rogelio de Jesús Tapias? sí señor; ¿quién era él? Él era el papá de Jaime; diga si usted sabe ¿antes del fallecimiento de don Rogelio cuánto se ganaba él? ¿qué ingresos tenía? No señor, no sé; díganos si usted sabe ¿qué gastos tenía Jaime Alberto Tapias para el año 2016 para proveer su subsistencia? ¿qué gastaba él para vivir? no sé; ¿puede decir usted qué gastos tenía el señor Rogelio de Jesús Tapias al momento del fallecimiento? Antecitos de él fallecer en el año 2016 no sé; diga si usted conoce ¿de dónde provenían los gastos que Jaime Alberto Tapias costeara los gastos de su subsistencia? De don Rogelio; ¿en qué le contribuía el señor Rogelio a Jaime Alberto? ¿con cuánto contribuía don Rogelio para el sostenimiento? No señor; no lo sabe, entonces ¿usted por qué nos dice que don Rogelio si contribuía para los gastos de don Jaime Alberto? ¿qué es lo que nos puede decir? Don Rogelio me comentaba que él se encargaba de los gastos de Jaime; ¿eso fue para qué fecha? Que don Rogelio le comentó eso más o menos 20 años, ¿y hasta cuando proveyó los gastos de Jaime don Rogelio? Hasta que murió; ¿y usted por qué sabe que fue hasta que él murió? Porque don Rogelio me comentaba y la hermana también, Irma. Irma. que estaba pendiente don Rogelio de todo lo de Jaime; ¿don Jaime y doña Irma le llegaron a comentar a usted de forma precisa cada cuanto era que don Rogelio apoyaba la sobrevivencia, es decir, aportaba para la sobrevivencia de Jaime Alberto? No señor; ¿no le dijeron eso? usted nos dice que doña Irma y don Rogelio le dijeron que ellos apoyaban ¿y usted sabe por qué ellos tenían que apoyar a Jaime con recursos? Porque la pensión de él no le daba para tanto; ¿la pensión de quién? De Jaime; de Jaime ¿y cuánto era la pensión de Jaime? Si usted lo sabe no señor; ¿y usted sabe cuánto era la pensión de don Rogelio? No señor; no sabe, ¿usted sabe si a don Rogelio realmente si le sobraba dinero para apoyar a su hijo? Sí; ¿no lo sabe? No; ¿usted sabe si a don Rogelio si le sobraba dinero para apoyar al hijo? No sé; no sabe, ¿entonces cómo sería que le daba esa ayuda? Nos puede definir si usted sabe ¿en qué consistía esa ayuda de don Rogelio para Jaime? Don Rogelio para mí era una persona como muy dada a estar pendiente de Jaime, lo que él necesitara”.

(...) “usted sabe si en la actualidad el señor Jaime Alberto aún sostiene una relación con la señora Blanca Miriam Giraldo? No, no sé; no sabe ¿usted cada cuánto visita a Jaime Alberto en el sitio donde él se encuentra? ¿o nunca lo ha visitado? No, nunca he ido; ¿nunca lo ha visitado? ¿y sabe qué vale el valor de la estadía de don Jaime Alberto en ese centro geriátrico dónde está? No sé”.

Efectuando entonces la valoración del acervo probatorio en su conjunto, la Sala desestima los argumentos de la recurrente, y concluye que en este proceso la parte demandante incumplió con su carga probatoria, en relación con el requisito de dependencia económica del demandante frente a su padre, para el momento de la muerte: **i)** De acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito 5 de esta providencia**, es que claro que aun cuando la dependencia no debe ser total y absoluta, en todo caso, esta es *cierta y no presunta*, por ello, se ha debido probar en el plenario que el causante efectivamente suministraba recursos a su hijo de manera *regular y periódica*, lo que no se puede construir a partir de suposiciones; y que el aporte constituyera un verdadero soporte o sustento económico para Jaime Alberto Tapias. **ii)** Pero nada de ello se prueba en el proceso, los testigos no otorgan el convencimiento en relación con tal aspecto, de manera que, si bien no es necesario demostrar el origen de los recursos con los que el afiliado o pensionado fallecido ayudaba, ni el monto exacto de lo aportado; y que el apoyo al hijo inválido no solo se manifiesta en la entrega directa de sumas de dinero, porque puede concretarse en la garantía de otros bienes valiosos para la satisfacción

de sus necesidades básicas y elementales como alimentación, vivienda, transporte, vestuario, etc; **lo cierto es que nada de ello se demuestra.** ii) Evaluada así la prueba, bajo las características propias del caso concreto, no existe fundamento alguno para inferir la subordinación económica que exige nuestro ordenamiento y afirmar la calidad de beneficiario del actor. iii) Lo que nos muestra la prueba del proceso es que el demandante percibe una pensión de invalidez equivalente al salario mínimo desde el **año 1999**, y aunque se certifica con prueba documental que vive en CASA HOGAR MIS ABUELOS desde el **17 de marzo de 2008** y que para el momento del fallecimiento de su padre el valor de la mensualidad superaba el valor de su mesada pensional; lo cierto es que no se demostró que la diferencia mensual y los demás gastos del demandante fuese asumida por su progenitor, quien con el valor de su mesada asumía los gastos de la mensualidad suya y de su cónyuge en el mismo Hogar, por lo que tampoco se advierte en sana lógica, que su pensión compartida proveniente de COLPENSIONES y EPM resultase suficiente para sufragar tales gastos y además, efectuar un aporte regular y significativo para su hijo.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a la Sala a **CONFIRMAR** la decisión **ABSOLUTORIA** y al no salir adelante el recurso de APELACION, las COSTAS en esta instancia a cargo de la DEMANDANTE y a favor de las codemandadas. Las agencias en derecho ascienden a **\$200.000** para cada entidad

7. LA DECISIÓN

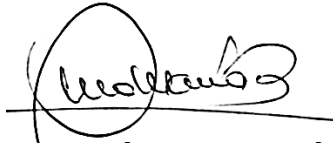
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR sentencia proferida por el Juez Quinto **Laboral** del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Las costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. El valor de las agencias es de **\$200.000** para cada entidad demandada

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quienes en ella intervinieron. Vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al Despacho de origen.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 102 del 15 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>



RADICADO: 0050013105-005-2018 – 00028

SENTENCIA del 11/06/2021

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,
para ello debe tener una cuenta de Microsoft.

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amzapatap_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eh0SBMKu8ehNqs4UI18DgA0BY2Kz-tdH-WTLi8BVmRfVIA?e=ZvmJ9s